

Los nuevos **PACTOS DE LA MONCLOA**
con la derecha y la patronal

¿A quién benefician?

PARA

DEFENDER

LA SALUD Y EL EMPLEO

NACIONALIZAR

LA BANCA Y LOS GRANDES MONOPOLIOS





Venezuela

Nueva ofensiva golpista del imperialismo



Declaración de
Izquierda Revolucionaria
Venezuela

El 1 de abril el Gobierno de Trump anunciaba el despliegue de una fuerza naval militar formada por destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros en el Mar Caribe, muy cerca de las aguas territoriales de Venezuela. Este contingente militar era reforzado poco después con un nuevo destructor de misiles guiados.

La excusa para esta nueva acción del imperialismo es la supuesta lucha contra el narcotráfico. El 26 de marzo, el fiscal general estadounidense presentaba cargos formales por narcotráfico contra Nicolás Maduro y 13 altos cargos militares y políticos venezolanos, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares “a quien facilite su captura”.

Esta acción militar en aguas del Caribe va unida al mantenimiento e intensificación del criminal bloqueo, que golpea



especialmente a los más pobres e impide al Estado venezolano acceder a miles de millones de dólares y euros procedentes de sus exportaciones petroleras.

Este bloqueo agrava aún más la tremenda crisis económica que sufre la economía venezolana desde 2013, con una caída del PIB del 52% y una hiper-

inflación del 130.000%, según datos oficiales.

El verdadero objetivo de esta arremetida imperialista es derrocar al actual Gobierno venezolano, uno de los principales aliados de China y Rusia en la región, para establecer un régimen títere de la Casa Blanca en Caracas.

Alemania:

Miles de millones para bancos y grandes empresas y recortes salariales para los trabajadores



Katharina Doll
Offensiv · Alemania

En el 24 de marzo, el Parlamento alemán decidió qué pasos dar frente a la crisis del coronavirus. Con el apoyo de todos los partidos excepto la ultraderechista Alternativa por Alemania se aprobó un presupuesto suplementario que incluye un fondo de rescate de 600.000 millones

de euros, superando el primer “paquete de rescate” gubernamental de 2008.

Con esta decisión se elimina el límite de deuda establecido por la Constitución alemana. También se ha acordado la suspensión de los límites de déficit por parte de la Comisión de la UE y la reactivación del “Fondo especial para la estabilización del mercado financiero” de 2008/9, que permite naciona-

lizaciones parciales y financiación estatal de grandes empresas de cara a salvar a los capitalistas.

Estas medidas no suponen “reformas sociales”, como se está insinuando. El Estado capitalista está actuando de acuerdo con el principio de “privatizar los beneficios y colectivizar las pérdidas”, como ya hicieron en la crisis de 2007/8. Se levanta el límite de déficit para que la clase

capitalista no tenga que pagar el precio de la crisis económica que ellos mismos han causado y para que seamos todos a través del Estado, y no los capitalistas, los que asumamos los costes de esta crisis sanitaria. En unos meses, como ocurrió en la última crisis, se apelará de nuevo al crecimiento de ese déficit para justificar políticas de recortes y austeridad contra la clase obrera.



El Gobierno de Boris Johnson

sí tiene un plan, y es siniestro



Joao Félix
Izquierda Revolucionaria
Gales

Con el sombrío hito de más de 18.000 muertos por Covid-19, 138.000 contagiados reconocidos, con una grave crisis sanitaria y con cientos de miles de despedidos, el reaccionario Boris Johnson se mofaba de la enfermedad.

El Sistema Nacional de Salud, desmantelado hasta el hueso por años de recortes y privatizaciones aplicados por los Gobiernos *tories*, ahora tiene que li-

diar con una masiva ola de infectados con una falta total de personal. En muchos hospitales más del 20% de los trabajadores sanitarios se han contagiado.

Cuando la pandemia ya era una realidad, Johnson mantuvo las escuelas abiertas y hablaba del desarrollo de “una especie de inmunidad de grupo”. Insultante. Semanas más tarde, la primera medida del Gobierno conservador ha sido proteger a las empresas con un paquete de 350.000 millones de libras para salvaguardar las ganancias de las multinacionales privadas.

Pero no es cierto que Johnson “no tuviera ningún plan”. El Gobierno conservador sí tenía un plan y lo ha intentado llevar a cabo: salvar a la burguesía británica, evitar el desplome de la economía utilizando como colchón la vida de centenares de miles de personas.

Lo ha reconocido *The Sunday Times* al informar que el asesor especial de Boris Johnson, Dominic Cummings, en una reunión del Ejecutivo, resumió sus intenciones: “inmunidad colectiva, proteger la economía y si eso significa que algunos jubilados se mueren, pues qué pena”.

Bolsonaro y la oligarquía brasileña:

desprecio absoluto por la vida de la población



Lucas Pico
Izquierda Revolucionaria
Madrid

Brasil está sufriendo un crecimiento descontrolado de la infección de Covid-19. Las perspectivas son aterradoras. Cuando la enfermedad llega a las zonas más po-

bres de las grandes ciudades y a las favelas (donde malviven hacinados y sin agua corriente 12 millones de personas) se producirá una auténtica matanza. El sistema sanitario ya se encuentra desbordado, debido a las políticas de recortes: desde 2015 no ha habido contratación de personal en los hospitales públicos de São Paulo.

A la catástrofe sanitaria se une la económica. Según el Banco Mundial, la economía brasileña se contraerá un 5% en 2020, y corre el riesgo de seguir sintiendo efectos negativos “significativos” hasta 2023. El panorama social es desolador. Ahora mismo, el 72% de los habitantes de las favelas dice no aguantar ni

una semana si están privados de su renta habitual.

A todo esto se une la actuación criminal del ultraderechista Jair Bolsonaro. Con su campaña “Brasil no puede parar”, no ha dudado en oponerse al confinamiento y en exigir a los gobernadores de los estados que reabriesen comercios, transporte, escuelas e iglesias. Ha asegurado que el Covid-19 no es más que un “resfriadito”, afirmando que “si la gente muere... así es la vida”. Incluso ha organizado y apoyado manifestaciones en contra de los cierres y cuarentenas.



Sanders claudica y apoya al candidato del ‘establishment’ demócrata

¡Es la hora de construir un partido de los trabajadores en EEUU!



Ana García
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

EEUU lidera las cifras de muertes y contagios por Covid-19 a escala mundial. Millones de familias norteamericanas padecen una situación dramática y la hecatombe económica tomará el relevo a la crisis sanitaria. Cuando el capitalismo muestra su completa incapacidad para resolver las necesidades de las masas y la lucha por transformar la sociedad adquiere más urgencia que nunca, Sanders ha elegido retirarse y apoyar a Joe Biden, el candidato del aparato del Partido Demócrata y fiel defensor de los intereses de la burguesía.

Zanjas abiertas en los parques para enterrar en fosas comunes a los muertos de la pandemia: esta es la imagen que ilustra a la perfección la barbarie que azota hoy a las familias trabajadoras en EEUU. Mientras los grandes capitalistas son salvados con recursos públicos, más de 22 millones de trabajadores han solicitado ayudas al desempleo en el último mes. Más desgarrador aún es el dato de muertes en la ciudad de Nueva York, la más golpeada: el 83% de los fallecidos se concentran en el Bronx, Queens y Brooklyn, los barrios más humildes y con mayor población negra y latina.

El Partido Demócrata no se puede reformar

El empobrecimiento masivo ha sido uno de los factores que explican el gran giro a la izquierda de la sociedad estadounidense, provocando una profunda preocupación en la clase dominante. Este giro encontró su expresión política en el movimiento de apoyo a Bernie Sanders, candidato a presidir el Partido Demócrata que se declaró abiertamente “socialista”, abogando por ideas progresistas que, en comparación con sus adversarios aparentaban ser radicales: un salario mínimo de 15 dólares la hora, sanidad universal, pública y gratuita, la cancelación de la deuda de los estudiantes...

Sanders nunca ha defendido la necesidad de derrocar el capitalismo. Pero lo verdaderamente relevante no es su persona sino el tremendo movimiento sobre el que se ha levantado y lo que expresa. La clase dominante norteamericana, muy consciente de este punto, ha desatado una feroz campaña contra él, dirigida desde los despachos del Partido Demócrata. Ante la ilusión generada por victorias muy importantes de Sanders en California o New Hampshire, el aparato del partido ha hecho todo lo posible para cerrarle el paso: el intento de pucherazo en Iowa, la presentación de candidatos “progresistas” como Warren para hacerle sombra, los intentos desesperados de Obama o Hillary Clinton por desacreditarle públicamente...

La experiencia de las primarias en 2016 dejó claro, una vez más, la imposibilidad de transformar el Partido Demócrata, un partido del sistema. Ya entonces, el debate sobre la necesidad de crear un partido de la clase trabajadora y la juventud, apoyándose en el movimiento que le respaldó, alcanzó una dimensión importante, pero lamentablemente Sanders se negó a dar el paso. Entonces defraudó a una parte muy amplia de su base social, que no dejó de empujar en esa dirección durante estos años.

Por qué ha renunciado Sanders y los límites del reformismo

“Te quiero en la Casa Blanca y haré todo lo que pueda para que eso ocurra”. Con estas declaraciones comunicaba Bernie Sanders el respaldo a la candidatura de Joe Biden, quien le respondía: “Te necesito para gobernar”. Tras esta cuidada puesta en escena se esconde una claudicación de grandes dimensiones.

La estrategia de los demócratas es arrastrar el voto de los seguidores de Sanders: Joe Biden ha asumido —de palabra— algunas de las reivindicaciones del senador, como el salario de 15 dólares la hora o la cancelación de la deuda de los estudiantes. Ninguna referencia a la deman-

da estrella de Bernie, el Medicare for All (sanidad universal pública y gratuita), por parte de ninguno de los dos. ¿Cómo es posible un olvido semejante en un momento en el que el negocio de la sanidad privada ha arrasado las vidas de más de 61.000 personas en EEUU? No es ningún olvido, sino una decisión consciente: Sanders ha decidido colaborar y poner su autoridad al servicio de la supervivencia del sistema, aceptando su lógica de principio a fin. En una coyuntura crítica, como la actual, ha decidido comportarse de forma “responsable”, como un verdadero hombre de Estado. No ha hecho falta pucherazo ni maniobras, se ha ido él solo y por su propio pie y mandando un mensaje: no es el momento de la lucha.

¿Qué consecuencias tendrá esto en las presidenciales de noviembre?

No se puede descartar una nueva victoria de Trump. La falta de una alternativa a la izquierda alimenta sus posibilidades. El magnate no ha dejado de defender en todo momento los intereses de la oligarquía norteamericana y con su demagogia moviliza a las capas más reaccionarias de la sociedad, a sectores amplios de la pequeña burguesía que exigen mano dura para contener los salarios y los derechos de los trabajadores, especialmente de los inmigrantes, y también a un segmento de obreros atrasados y desesperados por la crisis.

Así lo hemos visto en las protestas que desafiaban el confinamiento en Michigan, Kentucky, Carolina del Norte, Ohio, Utah, Nevada, Indiana o Maryland, alenta-

das por el presidente. Protestas pequeñas pero con manifestantes armados con fusiles de asalto, que reflejan la tremenda polarización existente en la sociedad norteamericana.

También hemos visto la otra cara de la moneda, incluso en pequeños episodios como lo ocurrido en Denver, cuando médicos vestidos de uniforme salían del hospital y enfrentaban a los manifestantes de extrema derecha y les cortaban el paso, a pesar de sus amenazas e insultos racistas. O la explosión de huelgas y protestas improvisadas en algunas zonas, como las enfermeras y sanitarios en California reivindicando medios para protegerse, o los trabajadores de supermercados en Boston exigiendo medidas de seguridad ante el alarmante número de positivos entre ellos. Algunos almacenes de Amazon, como el de Staten Island en Nueva York, también pararon su actividad por la imposición de sus trabajadores. Aunque hayan sido paros espontáneos y temporales también los trabajadores de algunas plantas de Ford, General Motors y Fiat-Chrysler forzaron el paro ante la falta de seguridad para su salud. Son chispazos, pero anuncian lo que está por venir.

El aparato demócrata cuenta con que, al final, muchos de estos sectores se inclinarán por el voto a Biden en las próximas elecciones y evitar una nueva victoria de Trump. Sería un error completo identificar esto con el final del giro a la izquierda en la conciencia de millones de estadounidenses que se ha gestado en la última década.

¿Necesitamos un partido de los trabajadores!

La experiencia acumulada es un tremendo capital que no se ha evaporado. La renuncia de Sanders será una experiencia amarga para muchos. Pero las lecciones serán también muy importantes para el futuro de la lucha de clases en EEUU.

Las condiciones materiales que impulsaron el movimiento pro Sanders no van a desaparecer sino que se agravarán. La clase dominante tendrá que enfrentarse a esto. Cuando hablamos de una crisis que encuentra su precedente más cercano en los años 30 del siglo pasado, también hay que considerar las consecuencias que tuvo en la lucha de clases, el avance de las huelgas masivas, de la escisión por la izquierda del movimiento sindical, y del crecimiento de las organizaciones que se reivindicaban marxistas.

La cuestión es cómo prepararse para enfrentar esa batalla. Nuestra clase necesita de sus propias herramientas para la lucha: un partido obrero, independiente, que defienda una alternativa socialista, la única capaz de ofrecer una respuesta a las aspiraciones de las masas en esta situación. Ahora más que nunca, es necesario levantar esa bandera en EEUU.





La pandemia amenaza millones de vidas y abre un periodo de enorme lucha de clases



Ismail X
Comité Ejecutivo de
Esquerda Revolucionária
(Portugal)

África es el segundo continente más poblado del mundo, con 1.300 millones de habitantes. Aunque en el momento de escribir este artículo los casos detectados de infección por el coronavirus en países africanos son relativamente pocos, unos 20.000 —el número real probablemente sea mucho mayor—, las previsiones de la OMS alertan de que se llegará a 10 millones de contagiados en los próximos tres a seis meses y, en el peor de los casos, a 3,3 millones de muertos este año.

El coronavirus puede desatar en África una catástrofe sanitaria de proporciones pocas veces vista.

La pobreza y la falta de infraestructuras provocan un permanente estado de alerta sanitaria

Para la aplastante mayoría de la población el contacto con un médico es un acontecimiento extraordinario, y los degradados sistemas sanitarios ya están totalmente superados por la existencia de otras enfermedades como la malaria, el sida, el ébola, el cólera, la tuberculosis, el sarampión, etc.

En África se concentran los países con las cifras más bajas de médicos por millar de habitantes y de número de camas, en más de 20 países no se llega ni a una cama por cada mil habitantes.

Por otro lado, los hospitales funcionan con equipos antiguos e insuficientes

y en la mayoría de los países sufren interrupciones frecuentes de suministro de energía, lo que dificulta la refrigeración de medicamentos y el funcionamiento de aparatos como los ventiladores, indispensables para tratar a los pacientes de Covid-19. Existen hospitales privados con el equipamiento adecuado para enfrentar la pandemia, pero asequibles únicamente a una minúscula minoría de ricos.

Las condiciones sanitarias son extremadamente precarias en las ciudades, con favelas laberínticas que se extienden por interminables kilómetros, vastas zonas sin agua canalizada o sistema de alcantarillado, mercados callejeros abarrotados de gente, tráfico caótico y una contaminación asfixiante.

El 80% de la población rural, según datos de la OMS, no tiene acceso al agua potable ni al saneamiento básico y tiene que desplazarse, a veces durante horas, para conseguirla. Medidas tan básicas como lavarse las manos son simplemente imposibles.

La economía informal supera el 50% en Egipto, el 65% en Nigeria y un impresionante 83% en Kenia, por lo que en muchos de estos países, la mayoría de los trabajadores recibe el salario diariamente, semanalmente o a destajo, y trabaja sin ningún derecho, lo que hace completamente imposible una parada de la economía sin crear inmediatamente una situación de hambre generalizada. Además, las familias pobres dependen de los mercados callejeros para tener acceso a alimentos y bienes de primera necesidad. En estos mercados, hablar de “distanciamiento social” es una broma.

La respuesta de los Gobiernos africanos: miseria y represión

Con cientos de millones de personas sin posibilidad de acceder a servicios básicos en materia de salud e higiene, los hipócritas y corruptos Gobiernos africanos elaboran protocolos para evitar contagios (confinamientos, estados de emergencia, apelaciones a lavarse las manos, mantener el distanciamiento social, etc.) conscientes de que no se podrán cumplir.

En África también los jefes de Estado apelan a la “unidad nacional” y al “espíritu de sacrificio” del pueblo, mientras contemplan los despidos masivos, aprovechan las medidas de excepción para reprimir ferozmente a los trabajadores y preparan un regreso temprano a la producción.

En Kenia, según informó *Al Jazeera* el 10 de abril, la policía está siendo más mortal que el virus. En Nairobi, su capital, la violencia ha adquirido perfiles espantosos, con muertes a tiros, incluyendo la de un niño de 13 años en un barrio pobre de la ciudad. En todas las grandes ciudades africanas, el escenario es similar: trabajadores, vendedores ambulantes y la población pobre, de los mayores a los niños, son víctimas de la violencia policial.

La opresión imperialista

En el continente africano actúan numerosas ONG. Muchas de ellas no solo sustituyen a la organización de las masas, actuando como analgésicos sociales, sino que desempeñan el papel de sustituir las funciones de los Estados, incapaces de garantizar ni siquiera la infraestruc-

tura necesaria para la explotación privada de los recursos naturales, por ejemplo las carreteras. Estas ONG son las que, financiadas con dinero público o con donaciones de “filántropos”, preparan diversas regiones para recibir el capital de los imperialistas.

La ideología de las ONG, totalmente fusionadas con los dirigentes reformistas de la izquierda, presenta un retrato de un continente negro, desnudo y arrodillado ante la caridad de los países “desarrollados” y blancos. Es absolutamente falso.

En primer lugar, mienten sobre el origen del subdesarrollo de los países africanos. Este no se debe a gobernantes diabólicos ni a “rasgos culturales”. La causa se encuentra en la posición de estos países en la división internacional del trabajo impuesta por las grandes potencias capitalistas, que son las que deciden qué, cómo, cuándo y quién produce.

El control político sobre los Estados africanos, a su vez, se hace con el garrote de la deuda. Los préstamos del FMI, además de impagables, se contraen mediante acuerdos de “ajuste económico”: liberalización de toda la economía, privatizaciones, recortes del gasto público, etc.

En última instancia, por supuesto, la situación de los países africanos se mantiene por la fuerza, recurriendo a la policía y a los ejércitos nacionales o, en los casos más graves, a los ejércitos de los países imperialistas, a los cascos azules y a la OTAN.

Un continente atravesado por las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución

También es falso presentar a las masas africanas como víctimas pasivas. Estas han sido protagonistas de grandes movimientos revolucionarios, y el continente está atravesado por las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución.

Desde el estallido de la Primavera Árabe en 2011 —cuando el movimiento de masas de los oprimidos derrocó dictaduras en países como Túnez y Egipto— hasta el presente, las huelgas y las manifestaciones masivas no han abandonado el continente: Argelia o Sudán son algunos de estos ejemplos.

La juventud africana, un 60% de la población total tiene menos de 25 años, ha vivido las consecuencias de la Gran Recesión de la última década. Ahora, sufrirá la mayor crisis de la historia del capitalismo hasta nuestros días. Independientemente de la dimensión que tome la pandemia en África, la crisis económica, citando una advertencia del propio FMI, “no perdonará a ningún país”.

Los trabajadores y campesinos pobres, la juventud, las mujeres, las enormes masas de oprimidos africanos han dado numerosas muestras de la gran energía revolucionaria que concentran y de su poder creador cuando se ponen en marcha. Para acabar con la barbarie que asola al continente y empezar a construir un mundo nuevo es necesario y urgente construir un partido revolucionario, que armado con el programa del marxismo sea capaz de canalizar toda la energía de las masas africanas hacia el derrocamiento del capitalismo.

**IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA**

Afiliate a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 611 477 757 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 640 702 406 · ASTURIAS: 686 680 720 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 625 707 798 · Bizkaia 664 251 844 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738 · EXTREMADURA: 638 771 083 · GALIZA: A Coruña 678 420 888 · Compostela 637 809 184 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 679 500 266 · MADRID: 914 280 397 · PAÍS VALENCIA: 685 098 482

www.izquierdarevolucionaria.net • contacto@izquierdarevolucionaria.net • @IzquierdaRevol



Miriam Municio
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

Si la crisis económica de 2008 supuso un punto de inflexión en la historia de la Unión Europea llevándola a una situación límite, la debacle de 2020 podría suponer su ruptura casi definitiva. Después del Brexit y ante una profunda y larga depresión, las fuerzas centrífugas contenidas a duras penas en la crisis del euro en 2014, a costa de aplastar al pueblo griego y sembrar la austeridad, se harán más incontrolables.

Aquella crisis tuvo un grandísimo impacto político. La idea de que el capitalismo europeo era “más humano” saltó por los aires a golpe de recortes salvajes, y el llamado estado del bienestar se demolió para salvar a la banca y los grandes capitales. Otro mito que se derrumbó fue el de la unidad política europea y la “solidaridad” entre los distintos estados miembros.

¿Esta vez va a ser diferente?

Muchos medios de comunicación y muy especialmente los dirigentes socialdemócratas insisten en que “no se trata de una crisis financiera porque la causa es una pandemia y no los bancos”, o que “se han aprendido las lecciones del pasado”...

Pero la realidad es la contraria. La pesadilla será aún mayor que en 2008. Y los planes de la burguesía europea, con Alemania a la cabeza, en nada han cambiado: preservar los intereses del gran capital y a partir de ahí sálvese quien pueda, pero que la factura la pague la clase obrera y las futuras generaciones.

El Banco Central Europeo (BCE) afirma que la economía de la zona euro en 2020 caerá un 9%, aunque el desplome podría llegar al 15% del PIB. Y afectará de lleno a las locomotoras europeas: -7% del PIB en Alemania y -7,2% en Francia. Las perspectivas para las economías del sur son aún menos halagüeñas: Grecia -10%, Portugal -8%, o Italia y España que podrían contraerse hasta un 12%.

Los efectos sociales ya están siendo brutales. Un informe del Deutsche Bank señala que “el paro en la zona euro aumentará del 7% a una horquilla del 15-20%”. Más de 30 millones de trabajadores de las cinco mayores economías de Europa se han visto afectados por suspensiones temporales o parciales de sus empleos. Según *Financial Times*, supone la quinta parte de la población activa de Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia. Francia encabeza la lista con casi diez millones de trabajadores, le sigue Italia con alrededor de siete y Alemania con unos cinco millones.

La deuda suma y sigue, preparando el siguiente estallido

Lejos de “corregirse”, los desequilibrios no han dejado de aumentar. Las finanzas públicas afrontan la nueva tempestad en peores condiciones que hace una década: la deuda conjunta de la UE es del 80% del PIB (en 2008 era el 60,7%), y es probable que alcance el 120% en 2021.

En el punto de mira se encuentran la tercera y cuarta economías de la eurozona. Una suspensión de pagos de Italia (134,8% de deuda y una previsión del 160% en 2021) o el Estado español (superará el 100% este año) tendría consecuencias aún mayores que la provocada por Grecia a finales de 2009.



El circo de la des-Unión Europea

¡Sálvese quien pueda, pero siempre a costa de los trabajadores!

Goldman Sachs calcula que la deuda de “las empresas que han perdido el aprobado” de las agencias de calificación en Europa es de aproximadamente ¡150.000 millones de euros! Endeudamiento masivo y parálisis de la producción: una receta acabada para una nueva crisis financiera.

La farsa de las cumbre europeas

En vez de una “respuesta común” y una utilización racional de todo el potencial tecnológico e industrial para combatir el coronavirus, asistimos a una guerra a muerte entre diferentes estados miembros de la UE por la compra de material sanitario y a un verdadero sabotaje comercial entre unos y otros. Un espectáculo bochornoso —con más de 100.000 muertos reconocidos oficialmente en el continente— que refleja la decadencia del capitalismo europeo.

En el plano económico, mucho se habla de tomar medidas “audaces y excepcionales”, pero no es más que propaganda. Veamos.

El BCE aprobó en marzo una partida de 750.000 millones de euros para comprar deuda pública. Tratan de evitar una dinámica ascendente y descontrolada de su coste, pero no están teniendo mucho éxito. Ahora, el BCE aceptará “bonos basura” en sus compras. Pero esto no resuelve el problema de fondo, simplemente lo encubre, agravando aún más sus consecuencias futuras. Por supuesto, ninguna medida contra los especuladores y la gran banca, los verdaderos responsables de una burbuja financiera que no cesa gracias al dinero público.

En el Eurogrupo del 9 de abril se acordó un “plan de choque anticrisis” de 540.000 millones de euros. Todas las exigencias de Pedro Sánchez, Costa, Conte o Macron a favor de un “Plan Marshall”, “coronabonos” y “solidaridad” fueron re-

chazadas por Alemania y los Países Bajos. Estos se niegan a cargar con la crisis de los demás y pretenden salir lo mejor parados defendiendo sus empresas e intereses nacionales.

Hay que señalar que estos 540.000 millones serán préstamos a devolver, y tienen un destino prioritario: salvar a las grandes empresas, no rescatar a la gente, los empleos ni los servicios sociales.

Finalmente, la Cumbre Europea de Jefes de Estado del 23 de abril fue un rotundo éxito de la burguesía alemana, que sigue marcando la política de la UE: se profundizará en la línea posterior a 2008, ajustes, austeridad y recortes pero a una escala mayor, mientras rechaza enérgicamente los “coronabonos” y cualquier Fondo de Reconstrucción que suponga mutualizar la deuda o transferencias presupuestarias a fondo perdido a los países del sur.

Por una Europa socialista

La base del enfrentamiento es el creciente choque de intereses de las diferentes burguesías europeas en un contexto de grave crisis económica y financiera. Cuando la clase dominante de los países periféricos, y en parte Francia, exigen una “mutualización de la deuda” pretenden exportar sus problemas al capitalismo alemán.

La burguesía alemana nunca aceptará cargar con las deudas de los países más débiles de la eurozona, menos cuando Alemania cerrará este año con un déficit del 4,7% de su PIB, frente al superávit del 1,4% de 2019. Cualquier mínima concesión será siempre a cambio de reforzar su papel hegemónico en la UE, pero no va a dejar de proteger a sus empresas en la lucha encarnizada que se avecina por cada palmo del mercado mundial.

Las tendencias centrífugas en la Unión Europea no han hecho más que aumentar —el caso del Brexit es su me-

jor exponente— azuzadas no solo por las tendencias proteccionistas y el nacionalismo económico sino también por factores políticos. La confianza de la población en que en la UE su futuro será mejor se ha desplomado. Por otro lado, las burguesías de todos los países europeos han optado de forma casi unánime por centrar su discurso hacia el nacionalismo patrioter como antídoto contra la protesta social y la lucha de clases.

Es la clase dominante quien alimenta y legitima a la reacción. Lo único que hace la ultraderecha es defender sin tapujos todo lo que la “burguesía democrática”, y los dirigentes socialdemócratas de todo pelaje, dicen con la boca pequeña. El argumento de que la amenaza de extensión del “populismo” ultra en Europa va a obligar a Alemania a aflojar en la cuestión de los eurobonos o del fondo de construcción no tiene base.

En la última década Europa ha vivido enormes movimientos huelguísticos y de protesta, crisis revolucionarias —como en Grecia, saldadas con una dura derrota política a manos de Syriza—, manifestaciones masivas de la juventud contra el cambio climático y movilizaciones históricas de la mujer trabajadora. Han surgido nuevos partidos de la izquierda reformista que han fracasado en su intento de reformar el capitalismo, mientras crecen las tendencias autoritarias y bonapartistas en numerosos Estados, y la extrema derecha avanza en un panorama de creciente polarización social y política.

Hoy más que nunca la única forma de acabar con la barbarie de este sistema es la lucha obrera y levantar una alternativa revolucionaria. Más tarde o más temprano, la clase obrera europea se colocará en primera línea de batalla. La tarea de construir una izquierda revolucionaria será la clave para lograr el triunfo, abriendo paso a la Federación Socialista de Europa y mundial.



Residencias de mayores en Madrid

El lucro privado y los recortes del PP provocan una hecatombe



Pilar Úbeda y Carmen Turrero
Izquierda Revolucionaria · Madrid

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia el modelo de gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid (CAM) y en el resto del Estado. Un modelo copado por las empresas privadas y que pone el negocio por delante del cuidado y la salud. Y, por otro lado, los recortes y la falta de medios han causado estragos en las residencias de titularidad pública, cuyas consecuencias vemos ahora de forma dramática.

De los más de 22.000 muertos contabilizados en todo el Estado, el número de ancianos fallecidos en las residencias públicas y privadas es de 15.323. Una auténtica matanza perfectamente evitable.

Ocultación de datos y amenazas a trabajadoras y trabajadores

Solo en las residencias de la CAM, en manos del PP, los fallecidos por Covid-19 son 5.558 y los contagiados y aislados se cuentan por miles. Ante esta escandalosa situación, desde el 26 de marzo hasta el 7 de abril la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dejó de dar los datos.

Las propias cifras del Ministerio de Sanidad y la CAM no tenían en cuen-

ta más que a los diagnosticados, siendo muy inferiores a la realidad. Solo cuando el escándalo ha saltado a los medios han comenzado a contabilizar a las víctimas. ¡Qué vergüenza!

Un buen ejemplo de este secretismo, permitido por las administraciones, son residencias de ancianos concertadas y privadas como Ballesol, presidida por el presidente de una de las patronales del sector (AESTE), o DomusVi en Pontevedra. En ambas se está exigiendo a los trabajadores que firmen cláusulas de confidencialidad y les han amenazado con el despido si hablan con los medios de comunicación para denunciar las muertes de mayores en sus centros fruto de la situación de caos y falta de medios.

El sector privado se preocupa solo por hacer beneficios. ¡Estas son las consecuencias!

Pese a todos estos datos, solo ocho centros han sido intervenidos en la Comunidad de Madrid, algo ridículo y que demuestra la falta de un plan serio para terminar con estas muertes. La CAM no quiere tocar los negocios privados, pero esta epidemia ha puesto en evidencia los resultados de tratar el cuidado de nuestros mayores como un negocio más.

Un negocio en el que hace tiempo entraron a participar grandes fondos de inversión, los llamados fondos buitres. En el Estado español hay 5.457 centros, el

40% de ellos son de titularidad privada. De toda la facturación de las empresas gestoras de residencias de mayores, 4.500 millones de euros, el 59% (unos 2.655 millones) corresponde a ingresos derivados de la gestión de plazas privadas puras y el 30,4% (1.370 millones) a la gestión de plazas concertadas.

Entre estas empresas encontramos a la francesa DomusVi, uno de cuyos centros ha sido intervenido por la CAM debido a la situación crítica en la que se encontraba. Pero la lista es larga: Intermediate Capital Group, CVC, Orpea... Esta última denunciada por sus trabajadores por ocultar las muertes de residentes en uno de sus centros de Madrid.

También han encontrado un nicho de negocio en este sector empresas constructoras que vieron bajar sus ingresos por el parón de la construcción en la crisis de 2008, es el caso de CLECE, filial de ACS de Florentino Pérez, o de SACYR, cuyo presidente ganó 8,16 millones de euros en 2019. O de la sanidad privada, con Sanitas o HM Hospitales entre ellas, y que con el negocio de las residencias cierran el círculo de la asistencia sanitaria privada.

Falta de medios, de personal y precariedad laboral: una tragedia anunciada

La situación de los trabajadores y trabajadoras —la mayoría son mujeres— es crítica: entre el 40 y el 60% del total de la plantilla está de baja. Las que están trabajando, lo hacen sin EPI para protegerse ni medios, soportan jornadas agotadoras con el desgaste, tanto físico como psicológico, que conlleva y sin saber qué ancianos están infectados o no, por la falta de tests.

La carencia de personal hace que los mismos auxiliares que atienden a los ancianos enfermos y aislados tengan que atender a los sanos, algo que facilita el contagio y la extensión de la enfermedad y las muertes. ¡Si no se ha contratado más personal para evitar esta situación es porque no se ha querido!

Esta falta de personal no es nueva y se ha visto agravada por las políticas de

recortes del PP en la CAM: recortes salariales, acuerdos marcos negociados entre patronal y la misma administración donde se ajusta el ratio a la baja, con el único objetivo de que las empresas puedan obtener el máximo beneficio posible, con condiciones de enorme precariedad laboral y salarial. Todo esto ha llevado a una completa degradación del servicio y de la atención a nuestros mayores, que ahora se traduce en una verdadera masacre. Esto es lo que ocurre cuando la salud o los cuidados se convierten en un lucrativo negocio.

¡Nacionalizar el sector bajo control de trabajadores y familias! ¡Dotación de medios y personal necesarios!

A pesar de la insistencia de las instituciones en que la tercera edad constituye el mayor grupo de riesgo, ni el Ministerio de Sanidad, ni la Comunidad de Madrid están haciendo nada por protegerlos, abandonándolos a su suerte sin posibilidad de aislarse en espacios seguros. De hecho, se ha planteado que los ancianos enfermos deberán permanecer en las residencias, a pesar de no tener los medios adecuados para asistirles a consecuencia del colapso de la sanidad pública.

El Gobierno del PSOE-Unidas Podemos no puede seguir obviando esta situación. La única medida posible para poner fin a esta catástrofe es tomar el control de todas las residencias, dotarlas de los medios sanitarios y humanos suficientes para poder tratar debidamente a los residentes y evitar que sigan muriendo como lo están haciendo: solos y lejos de sus familias. Si hay recursos, pero tienen que ponerse a disposición de quienes más lo necesitan, y no de banqueros y grandes multinacionales como está ocurriendo.

Es necesario nacionalizar todo el sector, las residencias privadas y concertadas y los servicios asociados, y dotar a los centros públicos de los medios y recursos necesarios, con personal en condiciones laborales y salariales dignas. Los capitalistas han demostrado su completa incapacidad, ¡es hora de que las trabajadoras y los trabajadores tomemos el control!

► www.izquierdarevolucionaria.net



No todas las críticas le hacen el juego a la derecha



Miguel Ángel Domingo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

Desde el comienzo de esta pandemia el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha dejado claras sus prioridades. A pesar de envolverse en una fraseología de izquierdas —el “gobierno de la gente”, el “escudo social”, etc.—, no puede ocultar que ha cedido a las exigencias fundamentales de la banca y las grandes empresas, aceptando respetuosamente los límites del régimen capitalista.

Para defender su gestión, el Gobierno, los medios afines, tertulianos, expertos..., han cerrado filas en torno a varios mantras, que podríamos resumir en tres: “nadie se esperaba esto”, “tenemos la mejor sanidad del mundo” y, ante cualquier crítica, “hay que tener cuidado con hacer el juego a la derecha”.

En primer lugar hay que decir que esta pandemia no era algo inesperado. Los especialistas en epidemias pusieron a los Gobiernos sobre aviso tras brotes como el SARS, MERS y otros. El escenario que proyectaron para una posible pandemia resultó ser casi exacto a como se ha desarrollado en la realidad.

Una gestión desastrosa

En el Estado español la falta de previsión y la carencia de medios han marcado la actuación frente a la irrupción de la pandemia. Al comienzo de la crisis, los dirigentes del PSOE y UP se consolaban repitiendo que “tenemos la mejor sanidad del mundo”. Una afirmación que ya había sido negada por la realidad de los recortes y la privatización antes de la llegada del Covid-19. Pero lo que hemos vivido estas semanas ha sido sobrecogedor.

Para empezar, la carencia clamorosa de test ha facilitado los contagios. Las cifras oficiales de fallecidos y enfermos han sido cuestionadas por numerosos sanitarios, virólogos, funerarias, registros de defunción y portales como *Maldito Dato*, nada sospechoso de extender los bulos de la extrema derecha.

La escandalosa falta de EPI —mascarillas, batas, guantes, etc.— y el número dramáticamente insuficiente de instalaciones ha imposibilitado medidas de contención básicas para controlar la expansión del virus en los hospitales. Esto explica que la cifra de sanitarios contagiados en el Estado español supere los 35.000, un 20% del total. Somos el primer país del mundo en este ranking macabro.

El Gobierno tampoco ha llevado a cabo otras medidas que podrían haber contenido la hecatombe. No ha intervenido la sanidad privada ni las residencias de mayores, transformadas por los recortes y las privatizaciones en mataderos. Por supuesto, la responsabilidad de la derecha en este asunto es de primer orden, por convertir el cuidado de nuestros mayores en un fabuloso negocio para los fondos de inversión. El PP es responsable de convertir la Comunidad de Madrid en la zona cero de la pandemia: de los 8.105 fallecidos hasta el 29 de abril, en torno al 73% vivía en una residencia.

El Gobierno de PSOE-UP y la crisis sanitaria



El 19 de marzo Pablo Iglesias asumió la “coordinación de los servicios sociales”, lo que incluye las residencias de mayores. Seis semanas después, su ministerio todavía no es capaz de ofrecer siquiera una cifra contrastada de los fallecidos en ellas. La investigación que ha abierto la Fiscalía afecta a 86 residencias, 86 de más de 5.000 centros en todo el Estado.

En estas semanas hemos tenido otra amarga lección del funcionamiento del capitalismo. Se han sucedido noticias como que el Gobierno ha invertido “116 millones de euros en tres contratos con el proveedor de las mascarillas defectuosas”, que “el Gobierno pagó por adelantado 2,1 millones por mascarillas defectuosas” o que “Sanidad adjudica a una firma sin empleados un contrato de 4,2 millones”. Estos titulares han aparecido en medios como *El País*, *Público* o *el-diario.es*, que no se dedican a esparcir los bulos de Vox sino todo lo contrario.

En medio de una guerra para adquirir material sanitario, el Gobierno tramita sus compras a través de comisionistas y estafadores. A esto hay que añadir los costes de transporte que se llevan empresas como Globalia y DSV. Este espectáculo obsceno se desarrolla mientras no se nacionaliza ninguna empresa española para fabricar y transportar los suministros que se necesitan en esta catástrofe sanitaria.

La represión siempre, siempre, favorece a la derecha

Desde el minuto uno quedó claro el papel destacado que otorgaba este Gobierno a la policía y al ejército en la crisis.

Como si de una pseudojunta militar se tratase, el comité de seguimiento ha estado repleto de uniformados. Pero lo más significativo ha sido el clima de Estado policial generado en seis semanas de confinamiento: se ha sacado a soldados a patrullar calles semivacías y se han impuesto 750.000 multas utilizando la Ley Morada, que suponen la misma cantidad que las notificadas desde que se promulgó di-

cha ley en 2015, una barra libre de arbitrariedad policial servida por el mismo Gobierno que en su día prometió derogarla.

Este giro represivo quedó perfectamente expuesto cuando el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, aseguró que trabajan para “evitar el estrés social que producen estos bulos y minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. Que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, saliese raudo en su defensa alegando un lapsus no nos extraña. Lo escandaloso es que Unidas Podemos cerrase filas con el general y con el ministro.

¿Qué tiene que ver todo esto con una política de izquierdas? Como demuestra la experiencia, cualquier legislación que recorte derechos democráticos, sindicales o que abra la puerta a la censura va a ser utilizada contra las movilizaciones de los jóvenes y los trabajadores.

¿Quién le hace el juego a la derecha?

Todo lo dicho no es un ejercicio de demagogia ni infantilismo “izquierdista”. Se pueden cometer errores, nadie está a salvo de ello, pero lo que hemos vivido en estas seis semanas no son “errores”, es renunciar en la práctica a una política realmente de izquierdas.

Esto es precisamente lo que está dando munición a la derecha. Sí, cuando el PP y Vox propagan bulos y *fake news*, y utilizan la demagogia reaccionaria para excitar a su base social, están cumpliendo su papel.

Ahora bien, calificar a los que exigimos una política que rompa con los capitalistas y responda a las necesidades de la población golpeada, de las familias trabajadoras y la juventud, como “provocadores que le hacemos el juego a la derecha”, es una infamia. Es el mismo discurso utilizado por los reformistas en la Revolución española en los años 30, en la Transición o, más cerca en el tiempo, cuando se acusa al pueblo cata-

lán de “provocar al fascismo” por manifestarse a favor de la república.

Hay una pregunta muy concreta que deberían hacerse los diputados y diputadas de UP: ¿qué habría ocurrido si en La Moncloa Pablo Casado, al frente del Gobierno, presentara una gestión semejante? No hay duda de que la denuncia y la movilización de toda la izquierda habrían sido contundentes.

Seamos claros. El PSOE está cumpliendo resueltamente sus tareas de Estado, al dictado de la patronal, como lleva haciendo décadas. Pero ¿qué han hecho los ministros y ministras, diputadas y diputados de UP? Aceptar todo lo que les ha puesto sobre la mesa el PSOE. Han retorcido el lenguaje para afirmar que se prohíben los despidos cuando no es verdad, o que la sanidad no se ha colapsado cuando es evidente que ha superado todos los límites y solo se ha mantenido por la labor decidida y valiente de sus trabajadores. Y para desviar la atención de sus políticas, llaman día tras día a la “unidad nacional”, ¿unidad con los mismos a los que acusáis todo el día de manipular y propagar bulos? ¿Qué clase de burla es esta?

Esta posición de los dirigentes de UP, y de las cúpulas sindicales tan decididas a firmar un nuevo pacto social, solo conduce a la parálisis del movimiento obrero, al desconcierto, a la desmovilización. ¿Quién ha creado las condiciones para que la derecha esté agitando “por la libertad de expresión” o por las mentiras respecto a las cifras de fallecidos? Los mismos que, a pesar de la retórica, rinden tributo con su política a Amancio Ortega, Ana Patricia Botín, y pretenden salvar los muebles del régimen del 78 en lugar de mandarlo al museo de la historia.

Como en otras situaciones excepcionales, solo confiando en nuestras fuerzas, las de la clase obrera, la juventud, los oprimidos..., podremos enfrentar a la burguesía y evitar convertirnos en los paganos de su crisis. Solo el pueblo salva al pueblo.



¿A quién beneficiarán los nuevos Pactos de La Moncloa con la patronal y la derecha?

Nacionalizar la banca y los grandes monopolios para defender la salud y el empleo

Vivimos momentos muy duros. Decenas de miles de muertos, cientos de miles de contagiados, una sanidad pública desbordada y millones de trabajadores despedidos o sometidos a ERTE dan cuenta de un enorme sufrimiento colectivo.

En este contexto las mentiras oficiales y el afán de imponer una mordaza a cualquier crítica desde la izquierda —con el argumento falaz de que hace el juego a la ultraderecha— se vuelven todavía más insoportables.

La propaganda de la unidad nacional y la insistencia en unos nuevos Pactos de la Moncloa para la “reconstrucción” de España se han convertido en el nuevo paradigma del Gobierno de coalición. Agarrándose con fuerza a la colaboración de clases, la vieja y la nueva socialdemocracia rinden tributo a los auténticos dueños del poder económico y político, y les aseguran que intentarán domesticar al movimiento obrero con un nuevo pacto social.

No pretendemos recrearnos en el sectarismo y el infantilismo izquierdista. Pero hay que encarar la realidad tal como es, no adornarla y manipularla. Solo así se puede hacer una política en beneficio de los oprimidos.

De condenar el régimen del 78 a defender el papel de los capitalistas

Si no hace mucho los dirigentes de UP insistían en poner fin al régimen del 78 y abrir un “nuevo proceso constituyente”, ahora caben pocas dudas de que colabo-

rarán con los capitalistas para una “gestión progresista” del sistema.

Los hechos son tozudos. El Gobierno PSOE-UP ha inyectado 100.000 millones de euros para rescatar con dinero público a la élite financiera y empresarial, ha diseñado los ERTE a medida de la patronal, les ha perdonado el pago a la Seguridad Social y ha decretado la vuelta al trabajo poco después de que Ana Patricia Botín y otros grandes capitalistas lo exigieran. Ha permitido a la sanidad privada que siga pasando la factura al Estado por los servicios prestados y a los terratenientes y medianos propietarios —esa derecha agraria que se levantó a principios de año— les ha garantizado la mano de obra barata y precaria que pedían.

Mientras, los trabajadores de la sanidad continúan contagiándose y exponiendo sus vidas, y al famoso “escudo social” se dedican no más de 600 millones de euros y medidas que, en no pocos casos, blindan los beneficios de la banca y los especuladores como los microcréditos y las moratorias en los alquileres. (Ver *El timo de las ayudas al alquiler* y *Plan del Gobierno PSOE-UP* en nuestra web)

En estas condiciones los ministros de UP asumen sin rubor el papel de comparsa por la izquierda y dedican sus esfuerzos a blanquear la política procapitalista del Gobierno. Avalan acríticamente la gestión que el Ejecutivo está haciendo de la crisis sanitaria, los retrasos inconcebibles en proporcionar material de protección, mascarillas, respiradores y test a los hospitales públicos, o su deplorable pasividad de cara a intervenir y me-

dicalizar las residencias de mayores para que no sean mataderos. Su completa falta de responsabilidad para ofrecer datos fiables de fallecidos y contagiados, despreciando a miles de familias que han visto cómo sus muertos no entran en las estadísticas porque “no se ajustan a los criterios técnicos”, han contribuido mucho a la demagogia reaccionaria del PP y Vox, que se alimenta de estos errores.

El pretendido escudo social no se construye con migajas

Por mucho que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, repita que han prohibido el despido objetivo como consecuencia del coronavirus, esto sigue sin ser verdad y lo sabe. Lo único que ha hecho es dejar en manos de un juez si los declara procedentes o improcedentes, mientras las cifras desmienten a la ministra: más de medio millón de trabajadores despedidos en la segunda quincena de marzo según la EPA del primer trimestre, que en el mejor de los casos recibirán una indemnización de 33 días al año en lugar de 20.

La ministra y sus compañeros de UP también insisten en que los ERTE (unos 500.000 que afectan a más de cuatro millones de trabajadores) son la medida para evitar despidos y mantener los puestos de trabajo cuando pase la pandemia. Una nueva mentira. Muchos de estos ERTE, como la experiencia demuestra, se convertirán en ERE y en millones de puestos de trabajo destruidos.

En estos momentos el Ejecutivo está discutiendo los últimos flecos de la lla-

mada “renta mínima vital”. Todavía se conocen pocos detalles concretos, pero todo parece indicar que nos encontramos otra vez ante mucho ruido y pocas nueces. Aunque hablan de que llegará a alrededor de un millón de hogares, de los que aproximadamente unas 100.000 serán familias monoparentales, no logrará sacar de la pobreza a estos sectores. Además, el listón se pone tan alto que se dejará en la cuneta a millones de familias que no cumplirán con los requisitos porque hay que estar en situación de casi indigencia para beneficiarse de esta renta.

El Gobierno, utilizando de altavoz mediático a los ministros de UP, trata de camuflar lo que no son más que medidas de caridad y beneficencia como si se tratase de una política rupturista en lo social.

Si realmente abogaran por una política de izquierdas consecuente, defenderían la nacionalización inmediata de toda la sanidad privada para ponerla a disposición de la lucha contra la pandemia. Dedicarían todos los recursos productivos para combatir esta catástrofe social, nacionalizando la banca y todos los sectores estratégicos de la economía. Así se podría proporcionar no migajas, sino un auténtico escudo social empezando por un seguro de paro para todos y todas las trabajadoras que se han quedado sin empleo, equivalente a un SMI de 1.200 euros. Se podría suprimir el pago de alquileres el tiempo necesario y crear un parque público de viviendas asequibles, y no habría obstáculos para poner en marcha un plan de choque en defensa de la

¿A quién beneficiarán los nuevos Pactos de La Moncloa con la patronal y la derecha?



sanidad y la enseñanza públicas acabando, de una vez por todas, con los recortes.

Obviamente esto requiere coraje, valentía, pero sobre todo una política que no renuncie a la lucha de clases. Los ministros de UP pueden declararse marxistas o comunistas, pero se llevarán las manos a la cabeza ante estas propuestas, diciendo que no son “realistas”, que no tienen cabida dentro de la “legislación”, que son “anticonstitucionales”. Pero entonces, ¿de qué sirve definirse como comunista o anticapitalista si al final se asume la lógica del sistema, y se utiliza el credo socialdemócrata de la unidad nacional para echar arena a los ojos de los trabajadores y estrangular su conciencia de clase?

Los nuevos Pactos de La Moncloa o cómo arrojar a la clase obrera a los pies del Ibex 35

Ahora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propone un gran pacto social a imagen y semejanza de los Pactos de La Moncloa de 1977, los dirigentes de UP dan un paso más y han salido en tromba para allanar el camino a este “gran acuerdo nacional” haciendo suyo el tono patriótico del presidente del Gobierno.

Todos se afanan en esta tarea. Pablo Iglesias en un tuit tras la sesión parlamentaria de control del Gobierno del pasado miércoles 15 de abril, señalaba: “Seguimos tendiendo la mano a la oposición, con toda la humildad, con todas las diferencias, para trabajar juntos, con la Constitución como común denominador, en un acuerdo de reconstrucción tras esta crisis. Patriotismo es poner el interés general por delante”.

Pero los temores entre muchos dirigentes de UP a unos pactos que recuerdan tanto a los que apuntalaron el régimen del 78, desmovilizaron a los trabajadores y sembraron su derrota política allanando el camino a las contrarreformas neoliberales más salvajes, lleva a sacar de la chistera todo tipo de trucos y rumorología para intentar dar la vuelta a los argumentos.

El sábado 18 de abril el “polítologo” Miguel Guillén defendía en Público.es (bit.ly/2VCCv2U) la idea, apoyada por otros intelectuales simpatizantes de UP, de que este gran pacto nacional podría echar a UP de La Moncloa y concluir en un Gobierno de concentración entre la

derecha y el PSOE. No se cuestiona el asunto de fondo, a quién beneficia este nuevo pacto social, sino que se pretende insinuar que los ministros de UP participan a regañadientes en esta operación y que sobre todo hay que lograr su permanencia en el cargo. Esta “teoría” entra en flagrante contradicción con la realidad. ¿Acaso Pablo Iglesias pretende hacerse el harakiri cuando es uno de los principales promotores de este pacto y su más entusiasta defensor?

No, lamentablemente no se trata de nada de eso sino de un paso más en el contrato que Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Irene Montero, etc. han contraído en la defensa del sistema.

Las reticencias del PP para este acuerdo, a pesar de las concesiones hechas por Pedro Sánchez como aceptar que se negocie en una comisión en el Congreso de los Diputados, no reflejan la opinión de los sectores decisivos de la burguesía española que están detrás de esta iniciativa y la alientan públicamente. Las dudas y críticas del aparato del PP se deben a que no quieren aparecer ante su base social dando oxígeno al Gobierno, y que esto pueda restarle apoyo electoral en favor de Vox que sí mantiene una actitud beligerante.

La cuestión no es tanto especular si el PP y la derecha se sumará finalmente a este acuerdo como las concesiones que el Gobierno realizará al gran capital para asegurar una reconstrucción económica a su medida, lo que pasa por ampliar su capacidad para extraer plusvalía de la clase obrera, y lograr que los recursos de su Estado —sí, del Estado capitalista— no se distraigan en otra cosa que no sea reponer su tasa de beneficios.

Los Pactos de La Moncloa firmados en 1977, además de aceptar que el aparato del Estado franquista quedara in-

tacto y sus crímenes impunes, trajeron recortes sociales para reducir el déficit presupuestario, topes salariales, una reforma laboral que abrió las puertas al empleo precario, reconversiones industriales salvajes, etc.

El Banco de España prevé que en 2020 la economía española caerá un 13,6%, acabará el año con un 21,7% de paro, el déficit público se disparará al 11% del PIB y la deuda pública ascenderá al 120% del PIB. En estas condiciones, como ya ocurrió en 2008, la burguesía española e internacional y sus instituciones (FMI, Banco Mundial, BCE, etc.) exigirán a los trabajadores que paguen los platos rotos de una catástrofe de la que no tenemos ninguna responsabilidad. Reclamarán que la deuda y el déficit público se compensen con nuevos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, y con nuevas reformas laborales y de las pensiones. Para lograr-

lo pretenden maniatarnos con un “pacto de reconstrucción nacional” del que los dirigentes de UP son uno de sus principales defensores.

Frente a la colaboración de clases, un programa de lucha por el socialismo

Los dirigentes de UP han renunciado en la práctica a la lucha de clases, y se creen que el “pragmatismo” de su política puede contener el avance de la reacción y la extrema derecha. Tenemos que decir honestamente que están completamente equivocados como la experiencia histórica demuestra. Si se acepta las reglas de juego de nuestros enemigos de clase, es imposible combatirlos con éxito.

La idea antimarxista de que no es necesario acabar con el capitalismo para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social; que participando en las instituciones de la “democracia” sería suficiente para torcerle brazo a la “casta” y lograr un sistema más razonable y “humano”, ha hecho aguas miserablemente cuando se ha tenido que confrontar en la experiencia práctica.

La política de colaboración de clases es el cáncer de la izquierda. Es una renuncia total que proporciona munición de grueso calibre a la burguesía, y se levanta como un obstáculo en el avance de la conciencia revolucionaria de los oprimidos. Este programa, que atiende a las necesidades materiales y morales de la pequeña burguesía “progresista” en los momentos de mayor polarización, ha conducido invariablemente al desastre político.

Es hora de prepararse para las grandes batallas del futuro de la manera más seria. Es hora de construir una organización que pueda resistir estas presiones y luchar decididamente por la transformación socialista de la sociedad. Es la hora de construir el partido de la revolución.



¡Hay que plantar cara al sistema!

Únete a **IZQUIERDA REVOLUCIONARIA**



www.izquierdarevolucionaria.net



“Si quieren ayudarnos, que deroguen los recortes y que pongan en marcha un plan de rescate a la educación pública”

Entrevista a Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes

El Gobierno de PSOE-UP anunciaba recientemente que el curso no terminará hasta el mes de junio, a pesar de que son más del 10% los estudiantes que quedan fuera del sistema educativo por no tener acceso a las clases online. El Sindicato de Estudiantes ha criticado duramente esta y otras medidas —como el mantenimiento de la EBAU— y ha tachado la actitud del Gobierno de falta de empatía con los estudiantes de familias trabajadoras. Entrevistamos a Coral Latorre, su secretaria general.

EL MILITANTE.- ¿Cuál es la alternativa del Gobierno para hacer frente en el terreno educativo a la situación abierta por la crisis del coronavirus?

Coral Latorre.- Ninguna. Las medidas aprobadas por el Ministerio de Educación son totalmente insatisfactorias, insuficientes y abandonan por completo a los y las estudiantes de familias trabajadoras. Es realmente sorprendente e indignante que, en medio de esta catástrofe social, mientras vemos cómo nuestros familiares fallecen, nuestros padres y madres son despedidos o víctimas de los ERTE, mientras la mayoría estamos confinados en pisos pequeños sin espacio digno para el estudio, el Gobierno actúe como si no pasara absolutamente nada.

Un ejemplo clarísimo es que aunque es obvio que el curso ya ha terminado, siguen empecinados en que este acabe en junio y que se utilizará la educación online para evaluar contenidos que no se han podido impartir presencialmente y en condiciones de igualdad. Presentar las clases telemáticas como una solución es negar el derecho a la educación a quienes menos recursos económicos tenemos y dar por válido que millones de estudiantes seamos apartados del sistema educativo.

Para garantizar que nadie queda atrás es por lo que demandamos la promoción de curso, y que quienes tengan una nota superior a 5 mantengan su nota media de las dos primeras evaluaciones, pero todo ello vinculado a un plan de inversión para la educación pública. Si no, todas las medidas serán solo parches que pagaremos mañana por las dificultades para ponernos al día.

Mirar hacia otro lado ante esta realidad es apostar por continuar con un modelo que ha puesto la enseñanza pública en una situación de emergencia provocando el mayor fracaso escolar de Europa.

Y, por si no fuera suficiente, se nos plantea que *por supuesto* tenemos que someternos a exámenes. La falta de empatía social y de solidaridad de este Gobierno que se dice de izquierdas es alarmante. Hablan de “ayudar a los estudiantes” pero no vemos esa ayuda por ningún lado. Si quieren ayudarnos, que deroguen los recortes y que pongan en marcha un plan de rescate a la educación pública: contratación masiva de profesores y psicólogos, bajar las ratios, aumentar las cuantías de las becas, garantizar que la

educación sea realmente gratuita desde infantil a la universidad... Es decir, que defiendan con una memoria económica muy concreta nuestro derecho a una educación pública y de calidad.

EM.- Hay quien desde la izquierda argumenta que la selectividad es un examen que “igual” a los estudiantes de la pública y la privada, vosotros defendéis su eliminación. ¿Por qué?

CL.- La EBAU no es más que una criba para que millones de estudiantes de familias trabajadoras no podamos acceder a los estudios superiores.

Es falso que este examen “iguale” a los estudiantes o que “corrija” las notas infladas de los centros privados. Son los estudiantes de estos mismos centros quienes disfrutan de academias particulares o profesores de refuerzo para poderse preparar mejor estas pruebas. Si esta es la realidad todos los años, con la crisis del coronavirus, que está sacando a la luz la existencia de una brecha de clase creciente en el sistema educativo, la selectividad será una escabechina todavía mayor.

Defender la selectividad es defender una universidad para la élite y tratar de esconder la falta de plazas públicas. Si hubiera suficientes no sería necesaria ninguna prueba, ni ninguna nota de corte para entrar a la carrera elegida, pero el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se niega a reconocer esta realidad inapelable.

Desde el Sindicato de Estudiantes abogamos por su supresión inmediata y decimos: hay necesidades sociales que cubrir y dinero para ello. Esta terrible crisis que nos golpea nos da la razón. ¿No hacen falta más médicos, enfermeras, investigadores de distintos campos, profesores, ingenieros...? Claro que sí. Y por eso seguiremos levantando el grito his-

tórico de la lucha del movimiento estudiantil: ¡ni tasas ni selectividad, el hijo del obrero a la universidad!

EM.- El Gobierno habla del “escudo social” y de “proteger a los más vulnerables”. Vosotros le reprocháis que solo está tomando medidas para garantizar los beneficios de los grandes empresarios y la banca. ¿Cómo afecta esto a la juventud?

CL.- Es totalmente inaceptable hablar de “escudo social” y que la enseñanza pública o la sanidad, entre otros sectores, queden excluidos de un plan económico que revierta los efectos de los recortes presupuestarios.

Es inaceptable que un Gobierno que se proclama de izquierdas y progresista niegue esos recursos para poder hacer frente a las necesidades sociales existentes mientras regala 100.000 millones de dinero público a las empresas del Ibex35 y a los grandes bancos, o sigue entregando 15.000 millones a la patronal de la enseñanza privada concertada...

El Gobierno está aplicando la misma receta que se aplicó en la crisis de 2008. Y somos también los mismos quienes estamos pagando sus consecuencias: los trabajadores y la juventud. Desde el anuncio del estado de alarma se ha despedido a más de 68.000 trabajadores al día, 53% de ellos menores de 35 años. El Estado español es ya el país europeo con mayor paro juvenil. La juventud está en la diana de todos los ataques vertidos por la patronal y los capitalistas.

Lejos de la campaña hipócrita y vomitiva de la derecha presentando a los jóvenes como una panda de vagos que queremos que nos regalen las notas y el curso, los hijos e hijas de la clase trabajadora —a quienes nunca nos han regalado nada— no pedimos más que nuestro derecho a una educación y a un futuro dignos.

Pero bajo el capitalismo, un sistema que nos ha condenado a recortes, a desahucios, a empleos basura o al paro, es imposible. Este sistema es el auténtico virus. Si queremos derechos y un futuro digno tenemos que luchar por la transformación socialista de la sociedad. Estamos preparados y preparadas para dar la batalla. Volveremos a tomar las calles. Hemos visto con claridad que el capitalismo no puede tener un “rostro humano”. Lo que estamos viviendo lo confirma. Pero también hemos aprendido que nuestros derechos se conquistan luchando. Sin duda, la juventud jugará un papel de primera línea en todos los acontecimientos que están por llegar.



El timo de las “ayudas” al alquiler

Endeudar a las familias y garantizar el negocio a la banca y los especuladores



Fernando Setién
Esquerra Revolucionària
Barcelona

El 2 de abril el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos anunciaba el decreto de ayudas a inquilinos, cuyas medidas no solucionan ni de lejos la dramática situación que enfrentan miles de familias en situación de vulnerabilidad. En la práctica, se garantizan los beneficios de los grandes tenedores de inmuebles y se potencia el negocio de la banca, que gestionará las “ayudas” —préstamos a los inquilinos— con avales públicos. Los especuladores volverán a ser rescatados por el Estado ante una perspectiva de impagos masivos fruto de la riada de ERTE y despidos.

La especulación de los fondos buitres dinamita los precios de los alquileres

En los últimos años, la burbuja especulativa en los alquileres ha incrementado los precios exponencialmente. Un proceso que coincidió con la irrupción en el mercado inmobiliario de los fondos buitres, que compraron inmuebles a precio de ganga aprovechando la crisis del sector y ahora los alquilan a precios prohibitivos. Hemos visto, incluso, cómo las administraciones públicas vendían viviendas de protección oficial sin que lo supieran los inquilinos, enfrentándose estos posteriormente a subidas del 100% o más.

Numerosos inversores-especuladores particulares han aprovechado esta burbuja para hacerse de oro, gracias a la desregularización del sector y los recortes en los derechos de los inquilinos consecuencia de las sucesivas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. A esto se suma la proliferación del negocio de pisos turísticos —en manos de grandes multinacionales— que ha disparado los alquileres, expulsando a muchas familias trabajadoras de sus barrios.

En la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística se cifra en 17.047,5 millones de euros los pagos que en 2019 supuso el alquiler de viviendas principales, la séptima parte del negocio inmobiliario en el país. La cuantía del pago de alquileres se incrementó en casi 1.700 millones respecto a 2016. En los últimos cuatro años, el volumen de negocio ha aumentado un 22% y la factura, desde la época de la burbuja, se ha doblado.

Bancos y fondos de inversión acaparan oficialmente cerca de 300.000 viviendas.

El fondo buitre estadounidense Blackstone se consolida como el mayor casero en el Estado español, con cerca de 30.000 viviendas en alquiler a través de sus Sociedades Cotizadas de Inversión Mobiliaria (SOCIMI), que suponen un negocio redondo para los grandes inversores. Mediante estas sociedades, adquieren inmuebles a precios bajos sin pagar apenas impuestos y utilizan su creciente control del mercado para impulsar al alza los alquileres, una auténtica “gallina de los huevos de oro”. Ningún Gobierno, autonómico o central, ni ningún Ayuntamiento les ha puesto impedimento alguno.

¿Por qué el decreto del Gobierno no protege a los inquilinos?

Los sindicatos de inquilinos de todo el Estado han sido unánimes en sus valoraciones: “Las medidas que pretende tomar el Gobierno no solo son insuficientes, sino que aseguran que las grandes sociedades tenedoras de inmuebles no pierdan un solo mes de alquiler, muy por encima de su valor real”.

El decreto no cubre ni a quienes comparten piso, ni contratos finalizados desde el inicio del estado de alarma, tampoco los contratos anteriores a la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94, ni los contratos de renta antigua. Estos últimos afectan fundamentalmente a gente mayor, precisamente la franja más vulnerable en esta situación de pandemia.

La suspensión de los desahucios será solo para personas vulnerables, mientras los servicios sociales den una solución y como máximo durante seis meses, haya o no alternativa habitacional. Desde 2013 se han producido 250.000 desahucios a familias en régimen de alquiler, cifra que ahora se disparará. ¿Qué tipo de solución es esta!

Otra medida “estrella” es solicitar una rebaja del 50% en la renta o un aplazamiento de cuatro meses del pago, siempre y cuando el propietario sea una entidad pública o un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros o superficies construidas de más de 1.500 m²) y la persona se encuentre en situación de vulnerabilidad.*

¿Cómo saber si tu casero es un gran tenedor? El inquilino debe acudir físicamente al registro de la propiedad (imposible en situación de pandemia) o recurrir a un servicio privado online. Y por supuesto, con la ingeniería empresarial, montando diferentes empresas, les permitirá salvar este obstáculo.

Además, es el propietario quien elige a qué modalidad se acoge. Obviamente, optará por la moratoria, para cobrar más adelante el total de mensualidades, con su actual precio inflado. Pero incluso la quita del 50%, teniendo en cuenta los precios desorbitados de los alquileres, supondrá en muchos casos garantizarles beneficios. Y quienes no tengan ingresos, ¿cómo pagarán ese 50%? ¿Los que se han lucrado con la especulación son los que ahora deberían pagar!

Cuando inquilino y propietario no lleguen a ningún acuerdo, el Gobierno abrirá una línea de microcréditos sin comisiones ni intereses, que el inquilino devolverá en seis años. Esta medida es una de las más vergonzantes. Supone un fabuloso negocio para la banca, que gestionará los créditos avalados por el Estado, y fomenta el endeudamiento de familias vulnerables, que arrastrarán una deuda a devolver junto al alquiler. Estos créditos son un escandaloso trasvase de dinero público a una parte del sector privado, que seguirá recibiendo íntegramente sus alquileres.

Este decreto no protege a los “más vulnerables”, y será un mecanismo más para hundir en la miseria a miles de familias, mientras los especuladores seguirán llenando sus bolsillos.

Un Gobierno de izquierdas tendría que enfrentarse a los grandes poderes económicos, apoyándose en la movilización de los trabajadores, y expropiar sin indemnización el parque de viviendas de los bancos, fondos de inversión y grandes empresas, y de aquellos entramados empresariales que disfrazan sus fortunas inmobiliarias mediante la ingeniería empresarial. Si hay suficientes viviendas, miles de ellas vacías, y necesidades sociales que cubrir, pero bajo el capitalismo decenas de miles de personas se ven amenazadas con quedarse en la calle.

Los Sindicatos de Inquilinos de todo el estado están denunciando este decreto y convocaron la huelga de inquilinos del pasado 1 de abril. A pesar de las dificultades para organizar un sector tan atomizado, más aún en medio del confinamiento, han sacado adelante una caja de resistencia con más de 33.000 euros y han conseguido 65.000 firmas para exigir al Gobierno la suspensión del pago de los alquileres mientras dure esta pandemia.

* Ingresos inferiores a 1.613 euros por unidad familiar y cuyos gastos de vivienda y suministros superen el 35% del total.



#HuelgaAlquileres

Por un plan que garantice vivienda digna y asequible para las familias trabajadoras

- 1) Suspensión del pago de alquileres e hipotecas para los inquilinos que no pueden hacerle frente.
- 2) Expropiación inmediata y sin indemnización de las decenas de miles de viviendas en manos de fondos buitres, bancos y empresas especuladoras.
- 3) Todos los inmuebles vacíos tienen que ser puestos en alquiler a precios asequibles. Si el propietario se niega, expropiación.
- 4) Nacionalización de las grandes constructoras y empresas inmobiliarias, así como de la tierra en manos de grandes propietarios y terratenientes, sin indemnización. ¡Basta de especular y destruir el medio ambiente!
- 5) Constituir una gran empresa pública de la construcción que opere atendiendo a criterios de calidad y respeto al medio ambiente. Debería poner la seguridad laboral como una de sus máximas prioridades y acabar con la precariedad, subcontratación y todo tipo de irregularidades que hoy caracterizan al sector de la construcción.
- 6) Plan de construcción de vivienda pública de calidad ofertada en alquiler a precios asequibles. No más del 10% del salario.
- 7) Participación de los movimientos y sindicatos de inquilinos, sindicatos de clase y del conjunto de la clase trabajadora en los planes urbanísticos y en la planificación del uso del suelo y la construcción de viviendas y equipamientos.
- 8) Para garantizar que estos planes no son asfixiados financieramente es imprescindible la nacionalización de la banca y el sistema financiero.





Crisis sanitaria en Catalunya

El Govern, al servicio de los empresarios



Esquerra Revolucionària
Catalunya

Seis semanas después de la puesta en marcha del Estado de alarma y a dos meses de detectarse a la primera persona oficialmente contagiada por Covid-19 en Catalunya, la pandemia, unida a las políticas capitalistas de recortes y despidos, dejan un panorama desolador para las familias trabajadoras catalanas, y son ya más de 4.300 los fallecidos por coronavirus.

En Catalunya, como en el resto del Estado, no hemos visto ni rastro del “escudo social” del Gobierno de coalición PSOE-UP, y lo que desgraciadamente sí hemos visto ha sido la aplicación de medidas orientadas a mantener los beneficios millonarios de los empresarios a costa de nuestra salud y empleo. Tanto el Gobierno central como el de la Generalitat han dejado tirados a millones de catalanes. Las políticas aplicadas por el derechista Quim Torra continúan, además se lava las manos y se autoexculpa de toda responsabilidad en esta devastadora crisis sanitaria.

La patronal sanitaria se forra con el Govern

Durante estas semanas hemos padecido un colapso en las UCI y los hospitales públicos, personal sanitario extenuado y haciendo jornadas maratonianas, ausencia de equipos de protección y material quirúrgico necesario. También hemos visto como las instalaciones hospitalarias privadas estaban enormemente infrautilizadas y se anunciaban ERTE en clínicas privadas.

Después de todo esto, el Govern de JxCAT-ERC ha notificado mediante el Decreto Ley 12/2020 del 10 de abril que pagará 43.400 euros a las clínicas privadas por paciente ingresado en UCI, ¡cuando el coste del tratamiento es de 1.000 euros, según la propia patronal catalana! El Govern indica que al final de la pandemia se realizará una auditoría de costes, aunque solamente se obligará a los hospitales privados a devolver el dinero si han obtenido un “margen de beneficio superior al razonable”. ¿Qué cantidad es esa? Y, en general, ¿es acaso razonable que estén haciendo negocio con una emergencia sanitaria!? Es un escándalo mayúsculo.

El mismo Decreto Ley incluye muchas otras suculentas compensaciones económicas para los amigos del Govern, los empresarios del sector sanitario, como los casi 100 euros por un test PCR. Unos test, por cierto, que los laboratorios privados siguen realizando a todo aquel que pueda pagarlo, sin importarles las necesidades colectivas de atención sanitaria, incluyendo el drama que están viviendo los colectivos más vulnerables. Esta práctica está prohibida teóricamente por el Govern, pero no ha movido un dedo para erradicarla. Es más que evidente que la consellera de Salut, Alba Vergés (ERC), miente cuando dice que el Govern tiene el control total sobre la sanidad privada; los empresarios de la patronal sanitaria hacen y deshacen a su voluntad.

Beneficios para la privada y recortes para la pública: esta es la receta del Govern, a costa de la atención sanitaria de la población. Recientemente, el profesor de farmacoepidemiología Daniel Prieto-Alhambra ha indicado que la Covid-19 ya circulaba por todo el Estado al menos tres semanas antes del primer caso detectado y que el número de casos diagnosticados en Catalunya como gripe común —que eran en realidad Covid-19— podría alcanzar los 14.000. Quim Torra presume de ser previsor pero la realidad es que los recortes y privatizaciones del sistema sanitario público impidieron una detección precoz de la pandemia.

El retraso en el suministro de mascarillas a la población a través de las farmacias y el colapso del sistema informático de recetas electrónicas es una nueva muestra de la ausencia de recursos y preparación de un plan de emergencia público para hacer frente a la enfermedad.

En una república catalana capitalista también moriría tanta gente

La consellera de la Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó (PDeCAT), afirmó que en una Catalunya independiente “no habría tantos muertos”. O sea, que no tener un “Estado propio” es lo que les obliga a aplicar rescortes y políticas privatizadoras, ¿verdad? ¡La demagogia del Govern no tiene límites!

Obviamente Sánchez decretó tarde el confinamiento y las medidas del Gobierno PSOE-UP están siendo nefastas, ¿pero por qué el Govern no aplicó medidas energéticas inmediatamente para proteger la salud de la población? ¿Por qué siguió permitiendo que centenares de miles de trabajadores fueran a su puesto de trabajo? ¿Por qué no ha aumentado drásticamente la inversión en sanidad y ha tomado el control de verdad de la sanidad privada? ¿Por qué no ha medicalizado urgentemente las residencias de gente mayor, donde se han producido el 25% de las muertes?

El Govern habla mucho del cuidado de la población pero no hace nada, y lo que sí hace es asegurar el beneficio de los grandes empresarios. No ha hecho nada para evitar la aplicación salvaje de ERTE en Catalunya, que ya afectan a más de 650.000 trabajadores.

A nadie engañan presentando los nuevos presupuestos como “sociales”, por mucho que los Comuns estén lavando la cara al Govern con su apoyo, argumentando que son “la mejor herramienta” para tener un plan de choque social.

La república catalana por la que votamos el 1 de Octubre, que defendemos y por la que peleamos, con movilizaciones masivas en las calles, millones de

trabajadores y jóvenes en Catalunya es una república catalana al servicio de la clase trabajadora, sin recortes ni desahucios, sin privatizaciones ni despidos, una república que nada tiene que ver con las políticas capitalistas que defiende Torra y aplica el actual Govern.

Es necesario continuar la batalla por la república catalana, pero hay que hacerlo con un programa al servicio de los trabajadores y que combata con firmeza a los políticos burgueses y reformistas del Govern que no tienen ninguna alternativa a la catástrofe social que provoca el capitalismo. Solo así podremos conseguir el apoyo del conjunto de la clase trabajadora de dentro y fuera de Catalunya.

La necesidad del socialismo

Incluso encontrándonos en una emergencia sanitaria histórica, el capitalismo sigue funcionando, su norma más básica no cesa: la búsqueda del mayor beneficio en el menor tiempo posible. Los empresarios no solo no están poniendo ni un céntimo de todas sus ganancias multimillonarias, amasadas a costa del sufrimiento y la explotación de los trabajadores, sino que están haciendo negocio: clínicas privadas y farmacéuticas, empresas importadoras de material proveniente de China, etc.

La fabricación de respiradores en la planta de SEAT en Martorell o la preparación de gel desinfectante en la de COTY en Granollers, más allá de que se trata de un lavado de cara, es un claro intento de estos empresarios de continuar sus negocios, y demuestra la habilidad de la clase trabajadora y también la necesidad de poner al servicio de las necesidades sociales el conjunto de la capacidad productiva del país.

La desindustrialización del sector textil en Manresa, Sabadell y Terrassa ha arruinado a miles de trabajadores, que ahora podrían estar confeccionando las tan necesarias batas y mascarillas. ¡Es necesario poner la fuente de la riqueza que generamos los trabajadores bajo nuestro control democrático, nacionalizando la banca y las principales empresas!

Frente al egoísmo y las criminales políticas capitalistas en esta crisis sanitaria, se ha levantado una enorme ola de solidaridad del conjunto de la población: miles de personas están haciendo mascarillas en casa para ser distribuidas, ayudando a hacer la compra a sus vecinos vulnerables, participando en un sinfín de iniciativas encomiables.

¡Es necesario poner toda la capacidad creadora de la clase obrera al servicio de la humanidad! Ahora más que nunca: ¡socialismo o barbarie!

ESQUERRA
REVOLUCIONÀRIA

www.esquerrarevolucionaria.net
Sigue los acontecimientos en Catalunya,
nuestros análisis y propuestas de lucha

Nuevas publicaciones de la Fundación Federico Engels

Los valores morales universales, al margen del tiempo, la sociedad y las clases no existen. En nuestra época, existe una moral revolucionaria y una moral burguesa. Esta última, se envuelve normalmente bajo el manto del “sentido común”, de la religión o de los valores “humanos”. Con esa supuesta neutralidad se infiltra en las filas de la clase trabajadora para diluir su conciencia de clase, para que acepte las reglas de un sistema impuesto por la clase dominante y quede paralizada ante sus tareas históricas: la transformación socialista de la sociedad.

La moral universal no es más que un gran engaño que utilizan de forma completamente consciente aquellos que controlan las palancas económicas y políticas de la sociedad. La burguesía nos habla de valores universales y de principios morales sagrados, pero ellos jamás los cumplen. Su fin es tan miserable y bajo como el lucro personal, y el medio para lograrlo: la explotación de la clase trabajadora. Todo lo que ayuda en esa tarea está justificado y es moral para la clase dominante.

En nombre de la “democracia” llevan a cabo intervenciones imperialistas. En nombre de los “valores constitucionales” reprimen y encarcelan. En nombre del “bien común” aprueban paquetes de rescate con dinero público para banqueros y magnates. Hoy oímos a dirigentes de la izquierda hablar de “patriotismo”, de una “guerra” en la que “todos somos soldados”, o de la actitud ejemplar y solidaria de reputados explotadores como Amancio Ortega. Pero tras esta envoltura se trata de ocultar una realidad que se abre paso por la vía de los hechos: se ha

declarado una guerra, sí, una guerra entre las clases.

En la actualidad resuenan con toda su fuerza las conclusiones que en 1938 León Trotsky escribió en *Su moral y la nuestra*. En aquel momento tenían por objetivo desmontar la nauseabunda campaña contra el genuino bolchevismo, pregonada entonces no solo por la burguesía, sino también por intelectuales “progresistas” y supuestos portavoces de la izquierda que igualaban a Lenin y Trotsky con Stalin y los crímenes del estalinismo que ahogaron la revolución. Tras estas emanaciones de moral se encontraba el intento de justificar su propia claudicación política.

La única forma de resistir las presiones de la clase dominante y no terminar claudicando es ser consciente de esa engañifa, de que la moral también tiene un carácter de clase, de sus fines, de sus trampas y estratagemas y combatirla en el seno del movimiento obrero. Existe una moral revolucionaria, la que persigue el fin más elevado de todos: la liberación de la humanidad de las cadenas del capitalismo. Es la moral de nuestra clase.

Ante la ofensiva sin cuartel que vivimos contra los derechos de la clase trabajadora la lectura de este libro es enormemente inspiradora para los revolucionarios. Para armarnos ideológicamente con el legado de los que nos precedieron en la lucha, lo recomendamos a todos nuestros lectores.

Su moral y la nuestra
León Trotsky | PVP 8 euros



Visita nuestra librería online

¡APOYA LAS IDEAS DEL MARXISMO REVOLUCIONARIO!



► Compra los libros ahora en www.fundacionfedericoengels.net y te los enviaremos lo antes posible



Fundación Nuestra Señora del Camino (Madrid)

La falta de medios pone en riesgo la salud y seguridad de usuarios y trabajadores



Sección sindical de CGT
Fundación Nuestra
Señora del Camino
Madrid

La pandemia por Covid-19 se ha propagado por las cinco plantas de la Residencia con Centro Ocupacional Nuestra Señora del Camino. Una prueba más de que el modelo de gestión privada pone el negocio por encima de la salud y el cuidado de los usuarios/as y sus trabajadores/as.

Una actuación negligente de las entidades-empresas y de las administraciones

La falta de Equipos de Protección Individual (EPI) y la ausencia de una planificación preventiva han provocado que en el centro haya más de 35 bajas laborales —con una plantilla de 95 trabajadores/as—, cerca de 35 usuarios/as con sintomatología, más de 10 usuarios/as hospitalizados con pronóstico grave y 5

casos de muerte. En la Residencia para Mayores de esta Fundación, un espacio anexo al nuestro, hay 5 mayores fallecidos, en torno a 6 trabajadores/as de baja laboral, 3 residentes hospitalizados por contagio y, aproximadamente, 15 mayores con sintomatología por coronavirus.

Antes de la intervención de la UME, desde CGT impulsamos una iniciativa para garantizar mascarillas y material a los centros, habiendo surtido a más de una decena de centros. Al final, hemos sido los propios trabajadores/as organizados los que hemos tenido que sacar las castañas del fuego a la entidad.

También somos los propios delegados sindicales y trabajadores los que estamos recabando los datos de contagiados y muertos en el sector madrileño de la diversidad funcional porque las empresas no los facilitan e incluso los ocultan, algo consentido por la Comunidad de Madrid (CAM) y por el Gobierno central.

Resulta insólito que en un sector de alto riesgo como el nuestro, o el de las re-

sidencias de mayores, no se garanticen a día de hoy pruebas masivas. Por eso mismo, desde CGT hemos exigido formalmente a la CAM transparencia. ¡Queremos saber ya los datos de contagiados y fallecidos! Hoy la situación sería diferente si desde el principio los responsables hubieran aislado la enfermedad y, acto seguido, se hubieran tomado medidas con todos aquellos que estuvieron en contacto directo con el foco.

Todavía no existen protocolos específicos unitarios, cada fundación-empresa puede diseñar los suyos. Tampoco existe ningún tipo de intervención real por parte de la CAM o el Gobierno central para controlar como actúan las fundaciones-empresa en este sector de alto riesgo.

Falta de personal y precariedad laboral

La entidad, contando con la colaboración del sindicato amarillo —Grupo Independiente de Trabajadores de la Fun-

dación (GITF)—, mayoritario en el comité de empresa desde 2015, no ha constituido el Comité de Seguridad y Salud (CSS), evitando así evaluar periódica y regularmente los riesgos laborales y de salud en el centro de trabajo.

Apenas un mes antes de esta crisis sanitaria, un grupo de trabajadores exigieron que se pusiera fin a que una parte de su trabajo fuera remunerado con comida. La empresa y el sindicato amarillo impusieron como castigo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que forzó la salida de más de una decena de trabajadores/as, recortando una plantilla que ya era insuficiente.

En el sector de la dependencia es la Administración junto a las entidades quienes fijan los ratios, atendiendo principalmente a criterios empresariales, de lucro, buscando ajustar las plantillas con el objetivo de obtener los máximos beneficios. Esto es una causa más, como en la sanidad o en las residencias de mayores, de esta catástrofe sanitaria.

Por otro lado, el XV Convenio del sector, firmado por CCOO y UGT, lo único que ha hecho es perpetuar bajos salarios y más precariedad, sometiéndonos a un enorme estrés y frustración. Por eso mismo tenemos que señalar que los dirigentes de los sindicatos firmantes también son responsables de esta situación.

**¡Por un servicio 100% público!
¡Basta de lucrarse a costa de
nuestras necesidades!**

Los insuficientes 300 millones de euros transferidos a las Comunidades Autónomas por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Iglesias, no han tenido la más mínima repercusión en las y los trabajadores y usuarios.

Está muy bien que se hable de lo público y de lo social en diferentes medios y espacios, como estamos viendo, pero queremos hechos y acciones concretas. Para ello es necesario que se tome inmediatamente el control público de todas las residencias del sector de la dependencia (fundaciones, ONG o empresas). Esto permitirá aunar recursos y planificar la atención sobre la base de las necesidades sociales, comenzando por realizar una inversión masiva, muy superior a esos 300 millones de euros, para contratar personal y con salarios dignos, tener ratios adecuadas y contar con todos los medios necesarios para dar la mejor atención posible.

► www.izquierdarevolucionaria.net

La multinacional Bottcher amenaza con un ERTE



Delegados de CCOO
en Bottcher Ibérica

La empresa Bottcher Ibérica forma parte del grupo Bottcher, líder mundial en el recubrimiento de rodillos y productos químicos para la impresión. Tiene 17 plantas de producción en 11 países, 24 empresas de distribución y 80 oficinas comerciales y almacenes repartidos por el mundo.

La estrategia de la multinacional pasa por incrementar drásticamente sus beneficios a costa, claro está, de precarizar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. En plena pandemia del

Covid-19 la dirección habla de buscar un “equilibrio” entre la rentabilidad de la empresa y la salud de los trabajadores. Pero todos sabemos que eso es imposible. Si se produce, paralelamente se ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores y sus familias.

Esta multinacional con los beneficios globales que obtiene puede asumir perfectamente el coste del cierre uno, dos o cinco meses. ¿O es que los trabajadores sí pueden asumir recortes, cuando muchos vivimos al día, y una gran multinacional con inmensos beneficios no puede siquiera aguantar unos meses?

La empresa planteó cerrar los días 6, 7 y 8 de abril a costa de las vacaciones de los trabajadores, lo que fue rechazado por los delegados sindicales y la plantilla. Tras esta oposición, Bottcher anunció que se acogía a la bolsa de horas inversas mandándonos a casa los mismos días “ofrecidos” en la propuesta, alegando razones productivas de carácter excepcional y provisional y amenazándonos con acogerse a un ERTE si nos oponemos.

Los delegados vamos a denunciar en los tribunales esta medida y nos oponemos a cualquier ERTE o medida que vaya contra los derechos de los trabajadores.

**SINDICALISTAS
DE IZQUIERDA** ★

Plataforma intersindical de todos aquellos que defendemos un sindicalismo combativo, de clase, democrático y asambleario, independientemente del sindicato al que pertenezcamos. No somos neutrales: abogamos por la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores como parte de la gran tarea que tenemos por delante, que no es otra que la emancipación de los oprimidos, acabando con el capitalismo y construyendo una sociedad libre de explotación y opresión, una sociedad socialista.

sindicalistasdeizquierda.net

Glovo, Deliveroo o Amazon multiplican sus beneficios a costa de más precariedad



José Luis Ruiz-Valdepeñas
Izquierda Revolucionaria
Madrid

El 16 de abril decenas de *riders* —los trabajadores que reparten a puerta del consumidor sus compras por internet— se manifestaban en Madrid, previamente en Málaga y Sevilla. Glovo había rebajado la tarifa base por recogida, pasando de 2,5 a 1,2 euros, una reducción en más de la mitad de los salarios.

El confinamiento ha disparado las compras a través de internet y los repartos a domicilio, habiéndose incrementado en un 45% los pedidos a restaurantes, por ejemplo. Las ventas de muchos productos han subido hasta en un 700%.

Además, muchas de estas compañías de reparto han llegado a acuerdos con grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, para distribuir sus productos. Por otro lado, el negocio de las empresas de comercio electrónico es inmejorable. Se prevé un crecimiento anual de 1.000 millones de euros, pudiendo alcanzar una facturación mundial de 6 billones de euros.

El fraude de los falsos autónomos

A pesar de estas brillantes perspectivas, las empresas intentan recortar aún más las ya precarias condiciones laborales de sus trabajadores. Los sueldos de los *riders*, tras 8 horas de trabajo diario, ascienden a entre 400 y 600 euros brutos mensuales!, que tras el pago de IRPF y cuotas de autónomos se quedan en 250 y 300 euros.

Además, en plena pandemia, no se han tomado medidas reales y efectivas para garantizar la salud de los repartidores, exponiéndose estos al contagio.

Estas multinacionales, que tributan en paraísos fiscales, defienden cínicamente que los *riders* son autónomos. Después de 18 sentencias (9 a favor de las empresas y 9 a favor de los trabajadores) la decisión final en estos momentos está en manos del Tribunal Supremo. En todos los casos que acabaron en los tribunales la Inspección de Trabajo redactó infor-

Protestas de los riders en pleno confinamiento



mes favorables a los trabajadores. Nos encontramos ante un auténtico fraude.

La muerte de un repartidor de origen nepalí en Barcelona el pasado año sacó a la luz las cuentas realquiladas. A través de esta práctica, un trabajador generalmente joven, sin empleo, sin papeles e inmigrante, comparte con el titular de la cuenta de reparto un porcentaje de los ingresos, precarizándose aún más sus condiciones laborales.

Aunque esta situación era conocida, no fue hasta la muerte de Pujan cuando Glovo tomó “medidas” limitando la disponibilidad en la aplicación a 13 horas. Hasta entonces no les llamaba la atención que hubiera cuentas que trabajaban ¡las 24 horas del día!

A pesar del confinamiento y de la difícil situación de la clase trabajadora, se

han producido huelgas en Amazon y en los departamentos de ingeniería y preparación de pedidos de Deliveroo. En este último caso las protestas ocasionaron un colapso del sistema. Ahora se han sumado los *riders*, con marchas por el centro de varias ciudades.

El Ministerio de Trabajo de UP tiene que actuar ya contra las multinacionales

Los capitalistas, con la excusa de la crisis sanitaria y a pesar de incrementar sus beneficios, presionan para hundir aún más nuestras condiciones laborales y salariales. Una situación alimentada por la política sindical de constantes cesiones a la patronal de las direcciones de CCOO y UGT, centradas exclusivamente en ges-

tionar los ERTE y recortes como cualquier otra asesoría jurídica.

Por su parte, Pablo Iglesias y Unidas Podemos se hicieron eco durante la campaña electoral de las reivindicaciones de los *riders*, acompañándolos en muchas de sus protestas. Ahora UP dirige el Ministerio de Trabajo pero no ha dado ni un paso efectivo para garantizar que todos estos trabajadores pasen a ser contratados, con condiciones laborales y salariales dignas.

Qué menos que plantear la necesidad de multar a dichas multinacionales por su actuación fraudulenta, y exigir el pago de todos los impuestos y cuotas a la seguridad social impagadas fruto de mantener a estos trabajadores como falsos autónomos. Y en caso de que no acepten, proceder a la expropiación y nacionalización de todas estas empresas.

► www.izquierdarevolucionaria.net

El Corte Inglés hace filantropía mientras ataca los derechos de su plantilla



Sindicalistas de Base
El Corte Inglés • Goya
Madrid

El Corte Inglés (ECI) se dedica a publicitar su marca haciendo públicas sus donaciones en ropa de cama para hospitales o en dinero para material hospitalario. Esta filantropía benefactora busca esconder los abusos de ECI para mantener e incrementar sus beneficios, aprovechando la crisis del Covid-19.

Ha ampliado el número de afectados por el ERTE, a pesar de que siguen haciendo negocio, y están imponiendo arbitraria e ilegalmente modificaciones sustanciales de las condiciones de traba-

jo. Todo con el silencio de los sindicatos presentes en el comité (Fetico, Fagga, CCOO y UGT). Aceptar esto supone asfaltar el terreno para que en unos meses la empresa comience a hablar de ERE, ya que la crisis económica continuará profundizándose.

Sindicalistas de Base defendemos el mantenimiento del empleo, salarios y todas las condiciones laborales. Hemos denunciado la aplicación y la firma del ERTE por parte de los sindicatos del comité, en una gran empresa que ha tenido beneficios multimillonarios durante todos estos años, que deberían destinarse a que las y los trabajadores no sufrimos retroceso alguno.

No somos ni heroínas ni “supercajeras”, somos carne de cañón



Trabajadoras de supermercados /
Sindicalistas de
Izquierda • Asturias

Escribimos esta carta trabajadoras de distintas cadenas de supermercados y grandes almacenes en Asturias, agrupadas en Sindicalistas de Izquierda, hartas de los aplausos vacíos del Gobierno y de la desprotección en la que nos están dejando las direcciones sindicales con presencia en el sector. Menos homenajes y más derechos y protección.

Ante la avalancha inicial no se incrementaron ni las plantillas ni la protección, fuimos las mismas que ya estábamos —fundamentalmente mujeres, muchas madres que, en aquellas tien-

das donde se han eliminado los turnos rotativos, llevamos semanas sin prácticamente ver despiertos a nuestros hijos— quienes asumimos más carga de trabajo arriesgando nuestra salud, la de nuestras familias y la de los clientes.

Los multimillonarios beneficios de las empresas antes del coronavirus, ahora se han disparado: solo en la semana del 9 al 15 de marzo las ventas aumentaron un 77,5% en alimentación envasada y un 51,3% en productos frescos, etc. La otra cara es que vemos diariamente a familias haciendo la compra a fin de mes con bolsas llenas de monedas de céntimo para comprar arroz o pasta.

Debemos organizarnos para defendernos de la patronal y exigir nuestros derechos y medidas que sean realmente útiles.

Hay que plantar cara al sistema

Únete a **IZQUIERDA REVOLUCIONARIA**

www.izquierdarevolucionaria.net

El mundo se enfrenta a una catástrofe sanitaria, social y económica. Cientos de miles de muertos y millones de contagiados, continentes enteros condenados a descender aún más en la escala de la miseria, y la clase obrera sometida a la lacra del desempleo masivo y la pobreza creciente.

Nada de esto era inevitable como nos quieren hacer creer. La causa de esta hecatombe no es un virus, sino la dictadura del capital financiero que subordina los recursos económicos del mundo a sus mezquinos intereses. Si el trabajo asalariado y la ciencia producen avances tecnológicos asombrosos, y bienes suficientes para satisfacer cualquier necesidad humana, esta fuerza creadora ha sido insuficiente para salvar vidas ya que sirven a un solo fin: acrecentar los beneficios del gran capital.

El sistema no sirve. Por eso las organizaciones que actúan como el flanco izquierdo del orden establecido, blanqueado sus políticas capitalistas y renunciando a la lucha de clases, le dan la espalda a la historia y al futuro.

La revolución socialista es una necesidad. La nacionalización de los recursos productivos y financieros, bajo la gestión y el control democrático de la clase trabajadora, permitiría la planificación racional y sostenible de la economía. Se podrían garantizar unas condiciones de vida decentes sin recortes y austeridad, una educación y sanidad públicas de calidad, el derecho a la vivienda, empleo digno no precario, y acabaríamos con la degradación del medio ambiente.

A todos y todas las que sentís y compartís la necesidad de poner fin a esta barbarie, os invitamos a sumar vuestros es-

fuerzos a los nuestros en Izquierda Revolucionaria. ¡Es la hora de la organización y la lucha!

Afiliate a través de la web o llamando a nuestros teléfonos. Puedes pinchar en **ESTE ENLACE** directamente.

